

Rarezas a doble banda

JOSÉ CARABALLO CUETO
ECONOMISTA

Se piensa que los izquierdistas son los independentistas, derechistas los penepés y los de centro son populares. La gran mayoría de los estadistas son bien conservadores, pero penepés como Johnny Méndez son más liberales que populares como Rafael Hernández Colón o independentistas que se oponen al estado benefactor.

La propaganda estadista se basa irónicamente en la paridad de transferencias federales que Puerto Rico obtendría con respecto a los estados. Ser estadista por esas razones debería implicar ser liberal: habría más estado benefactor y más intervención gubernamental por parte del gobierno federal, ideas que cualquier derechista en el mundo rechazaría. Así, resulta incomprensible un penepé republicano. De ahí las contradicciones de Fortuño con los recortes federales.

Los independentistas son relacionados con la izquierda por su activismo político. Con algunas excepciones, como el nuevo partido de trabajadores, ese activismo responde al status y no a las luchas progresistas, que es la lucha por la justicia social. Muchos independentistas rechazan el estado benefactor, el salario mínimo federal y otras protecciones.

Sus argumentos son que la independencia permitiría devaluar la moneda (reduciendo el poder adquisitivo de los trabajadores), quitaría el “mantengo” a los pobres (menos intervención) y traería el éxito al firmar tratados de libre comercio (receta neoliberal). Así, ser independentistas implicaría, paradójicamente, ser derechista.

Los populares veneran el gobierno muñocista, cuando se hicieron las más importantes obras en pro de la justicia social: reforma agraria, reversión de privatizaciones, mayores protecciones sociales, entre otros. Sin embargo, muchos populares muñocistas son conservadores: Sila y los suyos privatizaron la AAA, redujeron los beneficios a los empleados de tiempo parcial y apoyaron la monopolización de Wal-Mart en Puerto Rico.

La obstinación con el tema del status tiñe hasta las posturas de economía política. Esperemos que los nuevos partidos utilicen su probado poder de convocatoria para priorizar la justicia social.



ARTURO MASSOL DEYÁ
CASA PUEBLO DE
ADJUNTAS

El gasoducto: más mentiras

Mientras a George Washington le atribuyen ser el presidente que nunca dijo una mentira, quizás a Luis Fortuño habrá que bautizarlo como el gobernante que nunca dijo una verdad. ¿Por qué mente habitualmente? ¿Por qué se amarra al engaño abusando de la buena fe del pueblo?

En el tema energético su conducta ha sido bochornosa, sistemáticamente antipueblo y convenientemente favorable para sus amigos donantes. Para evidenciarlo, basta con echarle un vistazo a sus protegidos, “expulsados” de la Junta de Gobierno de la AEE, o cotejar en el contralor a los “ganadores” de las “sin subastas” del gasoducto. Todos receptores de millones y millones de dólares del saqueo que agrava la situación actual del País.

Sobre el gasoducto –su Vía Verde–, Fortuño le aseguró públicamente al País que este proyecto quedaba descartado por insuficiencia de gas. Ese anuncio se hizo acompañado de un informe que identificó opciones al fraudulento tubo por un comité intersectorial de su propia creación.

Sin embargo, en lugar de enviar una carta de cancelación a la solicitud de permiso en el Cuerpo de Ingenieros en Jacksonville, Florida, el gobernador decidió viajar a Washington D.C. para que allá le dijeran qué hacer. A su vuelta, el gobernador reclamó –también públicamente– que la subsecretaría del Ejército, Jo-Ellen Darcy, le pidió que no retirara la solicitud de permiso y que juntos buscarían cómo utilizar un pedazo del proyecto ya evaluado, con el fin de viabilizar una de sus opciones. Este maloliente pretexto del gobernador fue desmentido con mucha precisión por el propio secretario del Ejército, John McHuge. El secretario estableció que la solicitud sigue activa, que Fortuño no ha pedido retirarla y que, al contrario, siguen con los trámites correspondientes para la obtención del peligroso permiso.

Añade el republicano McHuge que la subsecretaría es una persona que toma sus responsabilidades con seriedad (o sea que Fortuño no) y que está ordenando al inspector general acelerar una investigación sobre corrupción en el proceso de permiso. Sin llegar a primera base ya la pestilencia de este

proyecto provoca investigaciones. El río suena y a corruptos se los lleva la corriente. Al destape de mentiras se suma una nueva cara. Ya no son los Massol, ni el congresista Gutiérrez, ni las comunidades, ni la prensa haciendo su trabajo, ahora quien cuestiona e investiga es uno de ellos, el propio jefe de gabinete de una agencia federal.

La lista de agravios del gobernador es interminable. Mintió sobre construir gasoductos en tiempos de campaña allá en el 2008. Repitió con la supuesta emergencia energética; luego dijo que el tubo salvador era la única opción para resolver los problemas del país. Chantajeó al pueblo colocando cifras de supuestos ahorros en las facturas de los abonados. Mas botó la bola cuando dijo que expropiar a las comunidades era necesario para alcanzar un permiso federal.

¿Qué buscan Fortuño y sus compinches cuando se esconden nuevamente bajo otra mentira? Busca hacer un tramo de gasoducto en el norte, sin fuente de gas en ninguno de sus extremos. Si Vía Verde es descabellada, esto no tiene nombre. Llevar gas a la planta de Cambalache en Arecibo –que apenas produce el uno por ciento de la energía del país– es insignificante, según argumentó el propio presidente de la AEE, el ingeniero José Ortiz.

Falta poco para las elecciones y buscan saltar pasos, violar las leyes, para usar el permiso de una cosa para hacer otra, también carente de sentido. Tienen prisa, buscan algo que parezca un permiso –a como dé lugar– para llenarse los bolsillos antes de salir de Fortaleza. Ya anunciaron que otorgarían los contratos de manera expedita. No hay espacio para más mentiras: corresponde retirar la solicitud de permiso para el proyecto que ya ha sido descartado por todos. Toca desarrollar las alternativas sin perder más tiempo, presentarlas al país como un proyecto completo y buscar su aprobación en todos los niveles necesarios.

Si no retiran la solicitud del gasoducto, le tocará al pueblo retirar a esos que insisten en el tubo. El riesgo para el País dejó de ser la tubería. El riesgo son los gobernantes. De persistir el tormentoso panorama, habrá que tomar nota de que un voto por ellos será un voto por el gasoducto.

Voto de castigo y realineamiento

La victoria del “no” en el referéndum de enmiendas a la Constitución y la reciente encuesta de **El Nuevo Día** presagian un realineamiento electoral importante. No hay otra manera de interpretar el resultado del referéndum sino como un voto de castigo tanto para el gobernador Luis Fortuño como para el líder del PPD, Alejandro García Padilla. Por otra parte, si el gobernador Fortuño perdiera las elecciones y el comisionado residente Pedro Pierluisi fuera electo junto a un gobernador del PPD se repetiría el voto de castigo que produjo el cruce de líneas en la derrota de Pedro Rosselló en 2004. Fortuño se convertiría también en el tercer gobernador consecutivo de un solo término.

En 2012 se conjugan al menos cuatro factores que configuran el voto de castigo y un realineamiento electoral importante: (1) si la economía y la criminalidad se convierten en el centro del debate político, las posibilidades de triunfo del gobernador se reducirían aún más de lo que las redujo la derrota en el referéndum; (2) el creciente interés en participar en las elecciones expresado por los no afiliados en la encuesta de **El Nuevo Día** y el triunfo del “no” indican un claro distanciamiento entre los electores y los líderes de ambos partidos mayoritarios; (3) el llamado voto melón que

salió a votar en masa en el referéndum se diluirá en los partidos de nueva creación, PPR, PPT y MUS, y (4) la escasa movilización de electores del PNP en el referéndum será otra manera de “castigar” al gobernador.

Además estos factores, pueden observarse otros indicios de realineamiento electoral: (1) en la encuesta, la estadidad no es favorecida en el plebiscito de noviembre y el ELA soberano, no apoyado por el PPD, es la alternativa mayoritaria; (2) en tanto que las últimas dos consultas sobre el status (1998 y 2012) se habrían hecho luego de victorias del PNP con más del 50% de los votos (1996 y 2008), de no lograr el 50% para la estadidad, se confirmaría la tendencia al distanciamiento de un segmento importante del electorado de consideraciones ideológicas en la elección de sus gobernantes; (3) finalmente, a la luz de las respuestas de los encuestados en torno a la situación surgida en las primarias de Guaynabo, las acusaciones de corrupción y fraude pierden efectividad como arma política.

Así las cosas, las elecciones de 2012 aparecen tan impredecibles como el referéndum. Entre el voto de castigo y el realineamiento electoral, un gobierno compartido, -o mal repartido entre los partidos tradicionales-, parece probable.



EMILIO PANTOJAS GARCÍA
SOCIÓLOGO